



Asamblea General

Distr.
GENERAL

A/43/735
21 de octubre de 1988

ORIGINAL: ESPAÑOL

Cuadragésimo tercer período de sesiones
Temas 12 y 96 del programa

INFORME DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL

IMPORTANCIA DE LA REALIZACION UNIVERSAL DEL DERECHO DE LOS PUEBLOS A
LA LIBRE DETERMINACION Y DE LA RAPIDA CONCESION DE LA INDEPENDENCIA
A LOS PAISES Y PUEBLOS COLONIALES PARA LA GARANTIA Y LA OBSERVANCIA
EFECTIVAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

El derecho de los pueblos a la libre determinación y su aplicación
a los pueblos sometidos a una dominación colonial o extranjera o a
ocupación extranjera

Nota del Secretario General

El Secretario General tiene el honor de transmitir a los miembros de la Asamblea General, de conformidad con el párrafo 14 de la resolución 1988/7 de la Comisión de Derechos Humanos, de 22 de febrero de 1988, el informe preliminar preparado por el Senador Enrique Bernalles Callesteros (Perú), Relator Especial sobre la cuestión de la utilización de mercenarios.

Anexo

INFORME PRELIMINAR SOBRE LA CUESTION DE LA UTILIZACION DE MERCENARIOS
COMO MEDIO DE IMPEDIR EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LOS PUEBLOS A LA
LIBRE DETERMINACION, PREPARADO POR EL RELATOR ESPECIAL DE LA COMISION
DE DERECHOS HUMANOS

INDICE

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
I. INTRODUCCION	1 - 7	3
II. EL PRIMER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL	8 - 11	4
III. ACTIVIDADES DEL RELATOR ESPECIAL	12 - 14	5
IV. VISITA A ANGOLA	15 - 40	6
A. Descripción de la visita	15 - 29	6
B. Observaciones a propósito de la visita	30 - 40	10
V. EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA VISITA A ANGOLA	41 - 54	13
A. El mercenarismo como elemento del conflicto regional	42 - 46	14
B. El proceso de las negociaciones en curso	47 - 54	15
VI. CONCLUSIONES	55 - 63	17
VII. RECOMENDACIONES	64 - 69	19

/...

I. INTRODUCCION

1. La Comisión de Derechos Humanos decidió en su 43° período de sesiones crear un Relator Especial sobre la cuestión de los mercenarios. De este modo, la resolución 1987/16 de la citada Comisión, aprobada el 9 de enero de 1987, dispuso en el párrafo 1 de su parte dispositiva "... nombrar por un año a un Relator Especial para que examine la cuestión de la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de impedir el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación". Esta resolución también pidió al Relator Especial que presentara a la Comisión, en su 44° período de sesiones, un informe sobre sus actividades acerca de esta cuestión (párr. 6).

2. Los antecedentes inmediatos a esta resolución se encuentran respectivamente, en la resolución 1986/43 del Consejo Económico y Social, de 23 de mayo de 1986, y en la resolución 41/102 de la Asamblea General, de 4 de diciembre de 1986. En efecto, tanto el párrafo 5 de la primera de las resoluciones citadas, como el párrafo 6 de la segunda resolución, instaron a la Comisión de Derechos Humanos a que nombrara un Relator Especial sobre este tema, con miras a preparar un informe que se examinaría en el 44° período de sesiones de la Comisión.

3. El comunicado de prensa HR/2062, de 3 de septiembre de 1987, hizo público el nombramiento del Relator Especial por parte del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en su 43° período de sesiones. En efecto, una vez consultada la Mesa de la Comisión, su Presidente decidió nombrar al Senador Enrique Bernalles Ballesteros (Perú) como Relator Especial de la Comisión sobre la cuestión de los mercenarios.

4. La Asamblea General aprobó el 7 de diciembre de 1987 la resolución 42/96 cuyo párrafo 8 de la parte dispositiva "acoge con satisfacción el nombramiento reciente por la Comisión de Derechos Humanos, de un Relator Especial ...", quien informará a la Comisión en su 44° período de sesiones. En esta resolución también se pidió "... que se presente dicho informe a la Asamblea General en su cuadragésimo tercer período de sesiones".

5. El Relator Especial presentó su primer informe sobre la cuestión de la utilización de mercenarios ante la Comisión de Derechos Humanos en su 44° período de sesiones (documento E/CN.4/1988/14, de 20 de enero de 1988). Una vez debatido, la Comisión aprobó la resolución 1988/7, de 22 de febrero de 1988, así como la resolución 1988/30, de 8 de marzo de 1988, decidiendo prolongar por dos años el mandato del Relator Especial. Además, la citada resolución 1988/7, en el párrafo 14 de su parte dispositiva

"Pide al Relator Especial que presente a la Comisión en su 45° período de sesiones, un informe acerca de la cuestión de la utilización de mercenarios como medio de impedir el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, junto con sus conclusiones y recomendaciones, y que presente un informe preliminar a la Asamblea General, en su cuadragésimo tercer período de sesiones, por conducto del Consejo Económico y Social."

/...

6. Por su parte, el Consejo Económico y Social aprobó el 27 de mayo de 1988 las decisiones 1988/126 y 1988/129, mediante las cuales aprobó, respectivamente, las resoluciones de la Comisión 1988/7 y 1988/30.

7. En cumplimiento de lo solicitado en las resoluciones anteriormente transcritas, el Relator Especial tiene el honor de presentar a la consideración de la Asamblea General, a través del presente documento, un segundo informe sobre la cuestión de la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y de impedir el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación. El presente informe centra su atención en la visita realizada a Angola, a invitación del Gobierno de ese país, para observar de cerca las consecuencias de las actividades mercenarias en el disfrute de los derechos humanos en la situación concreta del Africa sudoccidental.

II. EL PRIMER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

8. Como ya se ha dicho, el primer informe del Relator Especial fue presentado ante la Comisión de Derechos Humanos en su 44º período de sesiones. En él y a modo de actualización de la problemática, se procedió a enumerar los antecedentes del mercenarismo, señalándose la existencia de prácticas mercenarias que afectan el derecho de los pueblos a la libre determinación, el tratamiento internacional de las denuncias, el estado de la cuestión bajo la óptica del derecho internacional, los instrumentos vigentes en la materia y los trabajos del Comité ad hoc sobre un proyecto de convención internacional de las Naciones Unidas contra el reclutamiento, la utilización, el financiamiento y el entrenamiento de mercenarios. El informe se refirió extensamente a las denuncias recibidas sobre actividades mercenarias, así como a las medidas legislativas adoptadas por algunos Estados para combatir y sancionar las prácticas mercenarias.

9. En su parte sustantiva, el citado informe propuso una tipología de actividades mercenarias que ayudase a un conocimiento más preciso de las diversas formas que adopta esta práctica que la comunidad internacional reprueba y se detuvo extensamente en el análisis de la definición de mercenario. Se precisó así el positivo avance que ha significado la definición contenida en el artículo 47 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949, pero señalándose también las tendencias actualmente en curso que preconizan la ampliación y profundización de la misma, para que haya mayor eficacia política y jurídica en la prevención y sanción del mercenarismo y de los actos mercenarios.

10. Las conclusiones del primer informe repararon en que "las prácticas mercenarias han crecido en volumen y proporción, han expandido sus actividades desde Africa hacia otros continentes y se han convertido en un fenómeno más complejo por las múltiples formas de organización y de intervención que han desarrollado" (documento E/CN.4/1988/14, párr. 113). Concluyó también, en concordancia con reiteradas resoluciones de las Naciones Unidas, que el mercenarismo "acarrea una violación masiva de los derechos humanos y atenta contra el derecho a la libre determinación" (Ibid., párr. 114). Otras conclusiones se refirieron al carácter internacionalmente ilícito de las actividades mercenarias, a la inexistencia de normas de derecho internacional positivo que condenen directamente las prácticas mercenarias y precisen las obligaciones de los Estados

/...

en la materia, que la variedad de formas a que recurren las prácticas mercenarias rebasan las definiciones diseñadas para los conflictos armados internacionales y la existencia por tanto de vacíos legales; en fin, que los principales escenarios donde se producen actividades mercenarias son el África meridional y, según las denuncias recibidas, América Central, lo cual obligaba a continuar en el estudio de la cuestión.

11. La parte final del informe contuvo algunas recomendaciones, formuladas con carácter preliminar, destinadas en términos generales a promover el consenso que haga realidad la eliminación de las prácticas mercenarias. También se formuló como recomendación la conveniencia de ahondar en el estudio de las denuncias recibidas sobre actividades mercenaria en algunos lugares de África y América Latina, con la finalidad de verificarlas, precisar su alcance e implicaciones, así como la posible responsabilidad de terceros intervinientes (*ibid.*, párr. 125).

III. ACTIVIDADES DEL RELATOR ESPECIAL

12. En el marco de la renovación de su mandato, el Relator Especial se dirigió nuevamente a los Gobiernos de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, a las organizaciones internacionales y organismos u órganos especializados de las Naciones Unidas, así como a las organizaciones no gubernamentales con estatuto consultivo ante el ECOSOC, a fin de recibir informaciones fidedignas y relevantes para su mandato. Del mismo modo, se comunicó con expertos y estudiosos en la materia, con la finalidad de poner en su conocimiento el primer informe del Relator Especial, así como solicitar su opinión y colaboración en todo lo que sea útil para un tratamiento sustantivo de los problemas que plantean las prácticas mercenarias. Las respuestas a estas comunicaciones serán próximamente recibidas en el Centro de Derechos Humanos y serán incorporadas en el informe que el Relator Especial presente a la Comisión de Derechos Humanos en su 45º período de sesiones.

13. El Relator Especial viajó en los últimos días del mes de julio a Ginebra para celebrar consultas con el Centro de Derechos Humanos y programar la continuación de sus actividades. En el contexto de la visita se reunió el 3 de agosto de 1988 con representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con quienes analizó las cuestiones pertinentes a la presencia de mercenarios en África meridional, dentro de las características de la definición de mercenario establecida en el artículo 47 del Protocolo I a los Convenios de Ginebra de 1949.

14. El 4 de agosto de 1988 el Relator Especial inició en Angola su primera visita de campo. Las incidencias de esta misión se detallan en la sección siguiente. Está prevista, como otra actividad del Relator Especial, luego de la presentación de este informe a la Asamblea General, una visita de campo a Nicaragua, en respuesta a la invitación que el Gobierno de este país le ha extendido, en el marco de su mandato.

/...

IV. VISITA A ANGOLA

A. Descripción de la visita

15. A invitación del Gobierno de Angola, el Relator Especial llegó a Luanda en la madrugada del 5 de agosto de 1988, acompañado de dos funcionarios del Centro de Derechos Humanos. En el aeropuerto de Luanda fue recibido por el Jefe de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien reiteró la mejor disposición de su Gobierno en cooperar con el Relator Especial en el desempeño de su mandato.

16. En la tarde de ese día, el Relator Especial visitó las oficinas del PNUD y, a continuación, se entrevistó con dos representantes del ACNUR en Luanda. Ambos se refirieron a ataques que grupos armados realizan con reiterada frecuencia a campamentos de refugiados situados en territorios angoleños y que se encuentran bajo la protección del ACNUR. Tales ataques producen pérdidas de vidas humanas, violaciones de los derechos a la integridad, libertad y seguridad de las personas que viven en esos campamentos y, por último, importantes pérdidas materiales. Entre los ataques más recientemente sufridos cabe destacar, en 1988, los realizados a un campamento de refugiados del Zaire en la localidad de Dondo (Kwanza-Norte), atacados por un grupo de refugiados de Mawa, que estaban armados y ocasionaron al menos una muerte. Igualmente, en el mes de abril de 1988 un campamento de refugiados sudafricanos situado en Quela (Malanje), fue atacado por un grupo del UNITA, ocasionando destrozos por un valor de 80.000 dólares. En el mismo sentido, el 31 de mayo de 1988 otro grupo del UNITA atacó un campamento de refugiados del Zaire en Santa Eulalia, Namwangongo (Bengo), ocasionando heridas a una persona, secuestrando a otra y pérdidas materiales por valor de 285.000 dólares. No obstante, las pérdidas de vidas humanas más importantes debido a ataques de esta naturaleza a campamentos de refugiados situados en territorio angoleño se remontan a 1978, en que el ejército de Sudáfrica atacó un campamento de refugiados namibianos en Kassinga (Huila), muriendo en esta ocasión más de 600 personas, quedando heridas más de 1.500 y secuestradas entre 200 y 300. Igualmente, es de resaltar el ataque realizado el 6 de febrero de 1979 por el entonces ejército rodhesiano a un campamento de refugiados de Zimbabwe, situado en Bona-Luena (Moxico), que ocasionó más de 160 víctimas y 530 heridos.

17. El 6 de agosto de 1988, el Relator Especial visitó la sede del Movimiento de Liberación Nacional "Congreso Nacional Africano" (ANC), donde mantuvo una prolongada entrevista con el Sr. Joe Modise, miembro del Comité Ejecutivo y Jefe del Comando Militar de esa organización, acompañado de otros tres miembros del ANC. El Sr. Modise se refirió con detalle a varios ataques armados que sufrieron en el pasado representantes de su organización, así como sedes de la misma en varios países. Así, denunció el ataque realizado por grupos del UNITA a una granja de explotación agrícola situada a 40 km de la localidad de Quela, al norte de Angola, en el mes de marzo de 1988. La granja estaba habitada exclusivamente por civiles pertenecientes al ANC, y sus programas de explotación agrícola eran financiados por las Naciones Unidas. Según aseguró, los miembros del UNITA que atacaron la citada granja iban acompañados de personas de raza blanca que hablaban entre ellas en francés y afrikaans, por lo que deduce que se trataba de mercenarios pagados por Sudáfrica. Como resultado del ataque, se pudieron identificar posteriormente los cuerpos sin vida de 67 personas. Además, se informó que varias mujeres habían sido violadas antes de ser asesinadas, y un número indeterminado de niños fueron

/...

capturados. Los atacantes se retiraron del lugar después de haber filmado un vídeo y minado las casas. También destrozaron tractores, ropa y utensilios agrícolas, robaron comida y prendieron fuego a algunos locales.

18. Por otra parte, el Sr. Modise relató un ataque armado que sufrió en 1986 el Sr. Thabo M'Beki, Director de Información del ANC en Lusaka (Zambia). En concreto, fue detenido un individuo de nacionalidad neozelandesa cuando intentaba colocar una bomba en la casa del Sr. M'Beki. El detenido confesó que trabajaba para el Gobierno sudafricano y fue condenado a 18 meses de prisión. Otros atentados similares se habrían producido en las localidades de Livingston (Zambia) y en las oficinas del ANC en Londres. Igualmente, el Sr. Modise denunció un atentado realizado en el mes de marzo de 1988 contra el representante del ANC en Bélgica, quien descubrió 17 kilos de dinamita colocados en la parte inferior de su coche. Al día siguiente, la misma persona fue baleada en un templo, siendo gravemente herida. Según se sospecha, el grupo atacante huyó hacia París, donde la representante de su organización, Dulcie September, quien había recibido varias amenazas de muerte pero no conseguido protección de la policía francesa, fue asesinada en abril de 1988. Por último, el Sr. Albie Sachs, abogado del ANC en Maputo, fue objeto de un atentado explosivo colocado en su coche, a consecuencia del cual sufrió serias mutilaciones.

19. El Sr. Modise concluyó que, a juicio de su organización, todos estos ataques habían sido preparados por el Gobierno sudafricano, utilizando en ocasiones elementos mercenarios. Las investigaciones judiciales en curso ante los tribunales británicos y franceses no han producido hasta ahora ningún resultado en cuanto al esclarecimiento de los hechos y la individualización de los responsables.

20. El 8 de agosto de 1988, el Relator Especial fue recibido en audiencia por el Sr. Antero Abreu, Fiscal General de la República, quien recordó el procesamiento de varios mercenarios por parte de los tribunales de justicia angoleños en los años 1975 y 1976. Según él, se trataba de personas pertenecientes a otros ejércitos que habían sido individualmente reclutadas por las fuerzas armadas sudafricanas, por lo que no le cabía duda acerca del carácter mercenario de esas personas. También aseguró que el proceso judicial respetó las garantías procesales habituales, y que se probó debidamente ante el tribunal la auditoría de los encausados en relación con los crímenes que se les imputaban. Como consecuencia de estos procesamientos, cinco personas fueron condenadas a la pena capital y el resto a presidio de por vida. Estos últimos fueron finalmente liberados, a petición de diferentes gobiernos.

21. El Fiscal General también mencionó la Ley No. 4/77, de 25 de febrero, sobre prevención y represión del crimen de mercenarismo, cuyo artículo 1 prevé la aplicación de la pena de muerte o la pena de 20 a 30 años de reclusión a las personas consideradas culpables de ese crimen. No obstante, esta ley no ha sido aplicada hasta ahora en ningún caso concreto. A pesar de ello, el Fiscal General afirmó que las actividades mercenarias continúan produciéndose contra la población angoleña, siempre financiadas por Sudáfrica, quien concentra los elementos mercenarios contratados por ese país en el llamado "Batallón Búfalo". Entre los extranjeros que forman parte de este batallón, citó a personas de origen angoleño y portugués. En cambio, el Fiscal General matizó que los guerrilleros del UNITA son

/...

angoleños, por lo que no tienen el carácter de mercenarios, al faltarles el elemento de la nacionalidad diferente como distintivo del concepto de mercenario comúnmente aceptado.

22. El 9 de agosto de 1988, el Relator Especial visitó la sede de la SWAPO en Luanda, entrevistándose con el Sr. Jesaya Nyamu, miembro del Comité Central de esa organización, y la Sra. Johanna Zuse, miembro de su Departamento Jurídico. Los representantes de la SWAPO denunciaron ser víctimas de ataques armados reiterados realizados por mercenarios procedentes de varias nacionalidades, todos ellos reclutados por Sudáfrica para formar parte de sus ejércitos. Ya en 1976 Sudáfrica habría utilizado mercenarios israelíes en la llamada "Operación Safari", realizada en Namibia contra la SWAPO. Del mismo modo, en 1978 se encontraron pruebas de que el ejército de Sudáfrica tenía tropas de origen portugués (procedentes de Angola) y de habla española (de origen chileno). Posteriormente se constituyeron en territorio de Namibia dos Batallones del Ejército de Sudáfrica (los Nos. 31 y 32, este último conocido como "Batallón Búfalo"), que estarían exclusivamente compuestos de mercenarios de diversos orígenes (angoleños, de Zimbabwe, de los Estados Unidos, del Canadá y de diferentes países occidentales europeos). Según los representantes de la SWAPO, ambos batallones son utilizados por Sudáfrica para espiar a su organización, disfrazándose en ocasiones como combatientes de la SWAPO y cometiendo todo tipo de atrocidades en territorio namibiano. En este sentido, llegarían incluso a reclutar namibianos negros que actúan como escuadrones de la muerte bajo la dirección de mandos blancos, cometiendo los peores crímenes entre la población civil. En particular, se refirieron al reclutamiento de namibianos procedentes de la etnia "Bushman", y que se integran en el Batallón No. 31, principalmente, del ejército de Sudáfrica. De esta manera, Namibia sería el centro de las actividades mercenarias alimentadas por Sudáfrica, partiendo de este territorio actividades de agresión contra los Estados sudafricanos fronterizos.

23. De otro lado, los representantes de la SWAPO informaron al Relator Especial que en 1978 habían capturado a varios mercenarios; uno de ellos tenía tres nacionalidades (sudafricana, holandesa e inglesa); otro hablaba español, pero no se determinó su nacionalidad, pues murió como consecuencia de las heridas sufridas. En ese mismo período fueron también capturados mercenarios negros, uno procedente de Zimbabwe y otro de Mozambique. Ambos fueron rehabilitados e integrados en la SWAPO, según afirmaron.

24. Finalmente, los representantes de la SWAPO denunciaron ante el Relator Especial que sus propios representantes en el exterior sufren con frecuencia ataques armados que, a su juicio, son realizados por elementos mercenarios a sueldo de Sudáfrica. Así, en 1983 y 1984 habrían sido detenidos en Inglaterra dos mercenarios acusados de haber atacado y robado documentos de la oficina de la SWAPO en Londres (uno sueco y otro holandés). De modo similar, dos representantes de la SWAPO en Zambia y Tanzania fueron objeto de atentados con armas o explosivos.

25. En el mismo día, el Relator Especial fue recibido por dos representantes de la Oficina en Luanda del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Namibia. Según ellos, las actividades mercenarias ocasionan importantes pérdidas de vidas humanas por lo que convendría que las legislaciones nacionales castiguen debidamente

/...

esas acciones. De este modo, mencionaron actos de sabotaje realizados durante el mes de enero de 1986 en Cabilda, al norte de Angola, por elementos mercenarios. De ellos, se consiguió detener a uno de nacionalidad francesa, que había sido herido y que declaró haber actuado por cuenta de Sudáfrica para realizar actos de sabotaje a puentes en Namibia; al año siguiente fue enviado a Mozambique en un intercambio de prisioneros. De otra parte, expresaron su convicción de que muchos de los mercenarios utilizados por Sudáfrica en Namibia son de origen rodhesiano y norteamericano; en la prensa de los Estados Unidos se observan con cierta frecuencia anuncios que instan al reclutamiento de mercenarios. En definitiva, los mercenarios se caracterizan por matar de manera despiadada a elementos civiles de la población y constituyen un obstáculo para el disfrute de los derechos humanos de la población namibiana, en particular para el disfrute del derecho de ese pueblo a su libre determinación.

26. En el mismo día el Relator Especial fue recibido en audiencia por el Sr. França van-Dunem, Ministro de Justicia, quien también abundó en los efectos negativos de las actividades mercenarias procedentes, sobre todo, del "Batallón Búfalo" del Ejército de Sudáfrica, cuyas actuaciones a veces se confunden con las de sabotajes o atentados contra la seguridad del Estado. No obstante, expresó su opinión de que, conforme a la convención de la OUA, el mercenario se caracteriza por ser extranjero y por recibir una paga especial, bien sea en dinero o en especie. A su juicio, la prohibición del mercenarismo debiera alcanzarse a nivel internacional, del mismo modo que la piratería u otros crímenes internacionales. Igualmente, la legislación interna de los Estados debiera sancionar los actos de mercenarismo, favoreciendo de esta manera la creación de un espacio judicial universal para la represión y el castigo del citado crimen.

27. El Relator Especial completó sus actividades del 9 de agosto de 1988 acudiendo a la audiencia ofrecida por el Sr. Venancio Da Silva Moura, Viceministro de Relaciones Exteriores, quien le informó sobre las negociaciones en curso con Sudáfrica para la terminación del conflicto que enfrenta a ambos países en relación con Namibia. Según él, el ejército sudafricano se retirará a partir del 1° de septiembre de 1988 del territorio angoleño, y el 1° de noviembre de 1988 se procederá a la aplicación de lo dispuesto en la resolución 435 del Consejo de Seguridad, por la cual el pueblo de Namibia deberá ejercer su derecho a la libre determinación. En contrapartida, angoleños y cubanos se comprometen a realizar una retirada gradual pero total de las tropas cubanas del territorio angoleño. Como consecuencia de estos acuerdos, ya se habría producido un cese de facto de las hostilidades entre Angola y Sudáfrica. En cambio, quedaría por resolver el conflicto interno que enfrentan al Gobierno angoleño con las guerrillas del UNITA, lo que a su juicio constituye una cuestión interna entre angoleños. Según el Viceministro, debería terminarse el apoyo exterior que recibe el UNITA, en particular de los Estados Unidos y de Sudáfrica, facilitando así una solución al conflicto interno de carácter no militar, mediante la armonización y la integración de toda la población angoleña a través de lo que él calificó como un proceso de "clemencia nacional".

28. Por último, el Relator Especial se entrevistó el 10 de agosto de 1988 con el Mayor Mario Silla de Oliveira, oficial de información y reconocimiento del ejército de tierra, especialista en la cuestión de los mercenarios reclutados para servir en los ejércitos de Sudáfrica, y en especial en su "Batallón Búfalo" o No. 32. Según él, Sudáfrica reconoció la existencia del citado batallón a part...

de 1981 y estaría integrado por unos 2.000 hombres de procedencia angoleña (60%), europeos varios (20%) y ex rodhesianos blancos (20%). El Batallón No. 32 se compone de seis compañías, tiene sus bases en territorios namibiano y actúa contra las poblaciones civiles de Namibia, ocasionando muchas pérdidas de vidas humanas, en su afán de mantener expeditas y libres de control las carreteras y vías de acceso que conducen de Namibia a los países sudafricanos fronterizos, en especial a Angola. El citado batallón posee armas modernas y vehículos antiminas de diseño especial, hechos en Sudáfrica con componentes de la marca "Mercedes", conocidos con el nombre de "carros búfalo". También utilizarían helicópteros de desembarco. El Mayor Silla aseguró que en algunas ocasiones el ejército angoleño había capturado elementos mercenarios procedentes del "Batallón Búfalo". A continuación el Relator Especial visionó un video realizado por la radio-televisión portuguesa sobre la vida y actividades de algunos extranjeros componentes de ese batallón.

29. Poco después, el Relator Especial se dirigió al aeropuerto en donde, tras ser despedido por miembros del servicio de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, agradeció al Gobierno de Angola la cooperación recibida y dio por terminada su visita.

B. Observaciones a propósito de la visita

30. El conjunto de la información recibida por el Relator Especial procedente de diversas fuentes, permite establecer que Angola y los movimientos de liberación nacional SWAPO (en relación con Namibia) y ANC (en relación con Sudáfrica) son víctimas de acciones mercenarias. Estos hechos se remontan al año 1975 y a pesar del tiempo transcurrido la presencia de mercenarios no ha cesado, aun cuando el Gobierno de Sudáfrica y el UNITA, que son señalados en las denuncias como los autores de estas prácticas, niegan tanto su existencia como su hipotética participación.

31. Las prácticas mercenarias se dirigen simultáneamente a los siguientes objetivos: i) atacar campamentos de refugiados situados en territorio angoleño, a pesar de que estén bajo la protección del ACNUR; ii) hostilizar a miembros del ANC que residen en territorio de Angola, existiendo además los ataques a las personalidades de esta organización que cumplen actividades de representación ante otros países (Zambia, Mozambique, Inglaterra, Bélgica, Francia); iii) practicar operaciones de exterminio de los miembros de la SWAPO que viven tanto en Angola, como en otros países de la región: Zambia, Tanzania y desde luego en la propia Namibia; iv) afectar directamente la soberanía de Angola, invadiendo su territorio por la frontera sur o actuando como comandos que, mezclados con fuerzas del UNITA, operan contra poblaciones rurales o destruyen infraestructura básica para la industria y las comunicaciones.

32. El Relator Especial puso especial énfasis en solicitar precisiones sobre la identificación de las operaciones mercenarias y la responsabilidad demandable a quienes las pusieran en práctica. Al respecto, las evidencias reunidas pondrían de manifiesto que los responsables fundamentales de estos actos son por un lado el UNITA y por el otro el Gobierno de Sudáfrica. No quedó en cambio acreditado suficientemente que el Gobierno del Zaire estuviera directamente comprometido en esos hechos.

/...

33. En lo que respecta al UNITA, organización alzada en armas contra el Gobierno de Angola, configurando una situación objetiva de guerra civil, es un hecho matizadamente aceptado por las autoridades de Angola que tales guerrilleros son nacionales de su país, alzados contra el Gobierno. De acuerdo con la legislación internacional en la materia, los guerrilleros del UNITA no podrían globalmente ser considerados como mercenarios, al faltarles el elemento de la nacionalidad diferente, que es comúnmente aceptado, para la calificación del mercenario. Sin embargo, las evidencias reunidas apuntan a señalar que el UNITA recibe financiamiento extranjero que provendría sobre todo de Sudáfrica y de los Estados Unidos. Este hecho, de suyo intervencionista, no configura mercenarismo, pero en cambio serviría en parte para reclutar, financiar, entrenar y hacer participar de sus operativos armados a agentes mercenarios. En efecto, todas las fuentes señalaron que en ataques del UNITA se comprobó la presencia de mercenarios de distintas nacionalidades: franceses, sudafricanos, portugueses, chilenos, etc., los mismos que participaron activamente en crímenes contra la población civil, fuerzas regulares angoleñas y actos de sabotaje. Un hecho importante es que también el UNITA cuenta entre sus filas con personas nacidas en Angola, pero que han mantenido la nacionalidad portuguesa. Esta situación las configura objetivamente como extranjeras y por lo tanto han de ser consideradas como mercenarias.

34. Con relación al UNITA y su acción armada, el Relator Especial considera útil señalar que, en opinión de las autoridades angoleñas con las que mantuvo entrevistas, prima el criterio de considerar ese hecho como un conflicto interno, pero cuya solución por vías no militares y a través de un proceso de "clemencia nacional", se facilitaría si cesare el apoyo exterior que recibe el UNITA. Desde luego, una evolución del conflicto en los términos sugeridos significaría también el cese de la presencia de mercenarios por esta vía, con beneficio para las partes en conflicto, pero también para el ANC y la SWAPO, que soportan actividades mercenarias por cuenta del UNITA.

35. En cuanto al Gobierno de Sudáfrica, todas las fuentes coincidieron en señalar su responsabilidad directa en las prácticas mercenarias que asolan esa parte del Africa meridional. Como es de público conocimiento, Sudáfrica mantiene dentro de su territorio una política de apartheid que, junto con las condenas internacionales que ha merecido, le ha granjeado resistencia nacional interna por parte de la población negra afectada, pero también conflictos con los países de la "línea del frente", que han denunciado agresiones por parte de esa Potencia. En el curso de esta tensión internacional, el Gobierno de Sudáfrica ha ocupado militarmente Namibia, impedido la aplicación de la resolución 435/78 sobre el proceso para la independencia de Namibia y planteado una guerra no declarada con Angola, habiendo producido tanto acciones de hostilización militar como operaciones de mayor envergadura, tales como la ocupación de provincias sureñas de Angola que colindan con Namibia. Una situación similar se ha producido en Mozambique. Adicionalmente, Sudáfrica presta ayuda financiera al UNITA en el caso de Angola y al RENAMO en el caso de Mozambique.

36. Una mejor comprensión de los conflictos y tensiones que desde 1975 se desarrollan entre Sudáfrica y Angola, podría encontrarse en las diferencias políticas, socioculturales y geoestratégicas de Sudáfrica con relación al resto de los países vecinos y de Angola, que no lo es. En este sentido, los intereses en

/...

juego que habrían movilizadado al Gobierno de Sudáfrica a desarrollar una política conflictiva e intervencionista, serían las siguientes: asegurar la viabilidad y continuidad de Sudáfrica como enclave blanco occidental, sojuzgando para tal efecto a la población negra y poniendo en práctica una política de contención-expansión militar; controlar el Territorio de Namibia y evitar o demorar su independencia, tanto por razones económicas, como para impedir la conformación de gobiernos proclives a determinadas orientaciones percibidas como de radicalismo político; oponerse a la presencia de gobiernos socialistas en la región, evitando su consolidación por medios militares y de boicot económico; en fin, apoyar económica y militarmente a grupos como el UNITA que, de triunfar, le significarían gobiernos aliados y dispuestos a aceptar la tutela sudafricana en el conjunto de la región. En cualquiera de las hipótesis expuestas en este análisis, es obvio que el Gobierno sudafricano pone en práctica políticas violatorias de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, particularmente el que se refiere a la libre determinación de los pueblos. El intervencionismo sería, en esta perspectiva, la expresión concreta de la política activa del Gobierno de Sudáfrica en esta materia.

37. Para el desarrollo de su política exterior en la región del Africa meridional, el Gobierno de Sudáfrica no ha recurrido a la declaración de guerra; ha puesto más bien en práctica una política militarista de facto que ha perjudicado directamente a Namibia y también a Angola. Para estos efectos, ha utilizado sus fuerzas regulares, pero también ha empleado mercenarios. Una doble explicación acude para entender este último hecho. De un lado, preserva la vida de sus efectivos militares al no exponerlos a operaciones de riesgo, cuidando así a miembros de una población blanca que no debe en absoluto disminuir; de otro lado, se protege de acusaciones por actos de barbarie que recaen directamente sobre los agentes mercenarios, teniendo siempre la posibilidad de negar su participación y responsabilidad en el reclutamiento y la planificación en general de los actos que ponen en práctica los mercenarios.

38. Sin embargo, todas las denuncias sostenidas in situ por movimientos de liberación nacional y por Angola ponen énfasis en la participación del Gobierno de Sudáfrica en la activa presencia de mercenarios que han cometido hechos criminales, tales como atentados contra la vida de personas y contra la libre determinación de la población negra sudafricana, namibiana y angoleña. Las modalidades empleadas han sido diversas; entre ellas, el reclutamiento de personas de raza blanca para atentados individuales, o para entrenamiento militar y dirección de operaciones intervencionistas en Territorio de Namibia o de Angola. Pero el caso más flagrante es la conformación de dos Batallones, los Nos. 31 y 32, este último conocido como "Batallón Búfalo", constituidos en Territorio de Namibia como parte del ejército de Sudáfrica. El Relator Especial ha recibido testimonios y materiales que acreditan la existencia del "Batallón Búfalo" y su reconocimiento por Sudáfrica en 1981. No se trata de tropa regular de ese país, sino de una fuerza que reúne las características de ejército de mercenarios. En efecto, el "Batallón Búfalo", compuesto de 2.000 hombres aproximadamente, proviene del reclutamiento y financiación por Sudáfrica de extranjeros (40%), y en adición namibianos y angoleños, que bajo la conducción militar de los primeros, tiene sus bases en Namibia, y actúa tanto contra las poblaciones civiles de Namibia, como incursionando en el territorio limítrofe con Angola. Este batallón tiene equipamiento moderno y sofisticado y sus operativos militares demuestran su capacidad militar profesional y espíritu de aventura.

/...

39. Tanto el "Batallón Búfalo" como el Batallón 31, según material filmado que pudo apreciar el Relator Especial, no actúan por ninguna motivación nacional propia, involucrándose como parte en un conflicto ajeno, por razones que en algunos casos señalan expresamente - el anticomunismo - y en otros - la paga -, disimulan. El conjunto de estos elementos pone pues en evidencia que el Batallón Búfalo, así como el Batallón 31, formado por tribus nativas namibianas, como los "Bushmen", a los que se ha pretorizado, reúnen todas las características de fuerzas mercenarias que actúan contra Namibia y Angola, de acuerdo a los intereses en el conjunto de la región de una tercera Potencia. En este caso, las evidencias reunidas apuntan a la responsabilidad del Gobierno de Sudáfrica, aun cuando en el material fílmico que observó el Relator Especial, oficiales de alta graduación del ejército sudafricano niegan la condición mercenaria de los efectivos de esos dos batallones. Los casos de prisioneros provenientes de ambas unidades que admitieron su condición mercenaria apuntan, sin embargo, a la existencia de prácticas mercenarias contra Namibia y Angola, en los términos que precisa el artículo 47 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949.

40. A juicio del Relator Especial estos hechos son de extrema gravedad y afectan la vida de personas y el derecho de los pueblos a la libre determinación, revelando una actitud de premeditación y alevosía el que se recurra a mercenarios para llevar a cabo hechos criminales que la comunidad internacional repudia. Ciertamente, existe la disposición del artículo 47 del Protocolo Adicional, pero la subsistencia de las prácticas mercenarias, las dificultades para su probanza, su relativamente fácil camuflaje con tropas regulares nacionales, etc., señalarían que los Estados están jurídicamente indefensos frente a operaciones de este tipo, desde el punto de vista internacional. Por otra parte, la participación de mercenarios de nacionalidades africanas (Zimbabwe, Zaire, etc.), Europa y Norteamérica, sugieren que la legislación nacional, o bien no existe en cuanto prohibición expresa de reclutamiento mercenario, o bien se trata de normas de débil eficacia jurídica, dándose así situaciones de burla a la ley y vinculación de ciudadanos en condición de mercenarios a bandas que actúan como tales, relacionados con grupos insurreccionales o directamente ligados a acciones militares de terceros países. Este hecho refuerza el criterio expuesto por el Relator Especial en su primer informe, en el sentido de que se debe ampliar la legislación internacional que prohíbe y reprime el mercenarismo, así como promover que la legislación interna de los Estados sancione también las prácticas mercenarias.

V. EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA VISITA A ANGOLA

41. El Relator Especial considera oportuno formular algunos comentarios en relación a las negociaciones tripartitas que se vienen realizando entre Angola, Cuba y Sudáfrica, con la mediación de los Estados Unidos, cuyo acuerdo final, al restablecer la paz entre Angola y Sudáfrica, permitir el cumplimiento de la resolución 435/88 sobre la independencia de Namibia y otorgar garantías para el respeto a la libre determinación entre los países en conflicto, podría generar también las condiciones para la eliminación de la presencia de mercenarios en la región. Fue en el contexto del desarrollo de esas negociaciones que coincidió la visita del Relator Especial a Angola, por lo que el clima de una voluntad hacia la distensión no dejó de estar presente en la formulación de los puntos de vista recogidos. En tal sentido parece inevitable referirse a ese proceso de negociación en curso, en un deseo de contribuir a los propósitos de paz, amistad, cooperación y desarrollo en esa parte del Africa meridional.

/...

A. El mercenarismo como elemento del conflicto regional

42. Angola acudió a su independencia el 11 de noviembre de 1975 y a pesar de no tener fronteras con Sudáfrica, la guerra de la independencia fue continuada por una guerra no declarada con Sudáfrica, que es el conflicto que se trata de resolver en las negociaciones actualmente en curso. Las causas de esta confrontación se encuentran en la ocupación ilegal por Sudáfrica del territorio de Namibia, limítrofe con Angola; en la lucha de este país, junto con otros de la llamada "línea del frente" contra el apartheid en Sudáfrica, apoyando por consiguiente de manera activa al "African National Congress"; en la posición angoleña en favor de la independencia de Namibia, brindando por lo tanto apoyo y cobertura territorial a la SWAPO; en la ayuda financiera y contribución logística y militar que Sudáfrica otorga al UNITA, interviniendo así en asuntos internos que lesionan la soberanía de Angola; en fin, la objeción que Sudáfrica hace a la presencia de tropas cubanas en Angola, cuestión que a su vez este país rechaza, por cuanto esa presencia se ajusta a las reglas del derecho internacional y se debe a un acuerdo entre dos Estados soberanos. Como puede apreciarse, los hechos mencionados configuraron una situación de conflicto internacional armado no declarado y una comprensión cabal del mismo tiene que establecer las conexiones entre los intereses e intenciones hegemónicos de Sudáfrica en esa zona, la ocupación ilegal de Namibia, el asedio a la soberanía de Angola por su rol independentista y, por último, las acciones de la SWAPO respecto a Namibia y del "African National Congress" con relación a Sudáfrica.

43. En el desarrollo de este conflicto, Namibia ha permanecido bajo la ocupación política y militar de Sudáfrica contrariando disposiciones expresas del Consejo de Seguridad. Es más, su territorio ha sido utilizado como base de operaciones militares del ejército regular sudafricano. Así, se han practicado acciones de aniquilamiento contra la resistencia de la SWAPO en Namibia, se ha apertrechado a las fuerzas del UNITA, se ha bombardeado territorio angoleño afectando población civil y puntos militares estratégicos e inclusive se han ocupado territorios angoleños fronterizos con Namibia, correspondientes a las provincias de Namibe, Cunene y Kuando Kubango.

44. Como queda dicho, esta guerra no declarada se da desde la independencia misma de Angola. En el plano interno, el Gobierno del MPLA en Angola enfrentó las acciones armadas de grupos que no reconocían su autoridad: el FNLA en la región nororiental y sobre todo el UNITA que, con el posterior apoyo material, financiero y militar de Sudáfrica, concentró sus tropas en la región sur. Pero indudablemente que las principales hostilidades corrieron por cuenta de Sudáfrica, que de incursiones militares a lo largo de la frontera sur y repliegues a Namibia, cambió su objetivo de destrucción de las bases de apoyo de la SWAPO a una abierta acción militar contra Angola, hecho este que se hace visible luego que Sudáfrica incumplió la resolución 435/78 del Consejo de Seguridad, condicionando la puesta en práctica de ésta al retiro previo de las tropas cubanas en Angola. Esta vinculación es inexistente en el texto de la resolución 435.

45. El hecho concreto es que a partir de la presente década la ofensiva militar sudafricana sobre Angola fue mayor. Dentro de esta estrategia, las operaciones de apoyo al UNITA se incrementaron, así como la coordinación entre sus respectivas fuerzas; es más, los ataques se dirigieron directamente contra las bases del propio ejército de Angola y territorios fronterizos en el sur de Angola resultaron ocupados. Así pues, se habría tratado de debilitar política, económica y

/...

militarmente a Angola, forzarla a cortar su apoyo a la SWAPO y al ANC, obstaculizar su proceso de reconstrucción nacional y, como consecuencia de todo ello, reducir su capacidad de negociación respecto de Sudáfrica y mantener la presencia hegemónica de este último país en el conjunto de la región.

46. El uso de mercenarios en este conflicto no es ajeno a la estrategia que aparece en ejecución. En efecto, dados los objetivos múltiples de las acciones, las evidencias reunidas sugieren que el financiamiento y el entrenamiento militar proporcionado por Sudáfrica al UNITA incluyó el empleo de mercenarios, tanto para asegurar la eficiencia militar de esta organización, como por la naturaleza de determinadas acciones: sabotaje, torturas, crímenes, etc., que convenía corrieran por cuenta de una fuerza directamente implicada en un conflicto interno. En este mismo sentido, la organización de unidades especializadas, tales como el "Batallón Búfalo", el Batallón 31, la "Unidad Koevet", obedecería a la conveniencia de emplear mercenarios en unidades "especiales" no convencionales, que actúan asociadas a las fuerzas sudafricanas regulares, pero en acciones que, por su naturaleza cruel o el alto riesgo que significan, es preferible estratégicamente no comprometer a las fuerzas regulares. En síntesis, la presencia de mercenarios sería consecuencia del conflicto y del estado de guerra no declarada en la región.

B. El proceso de las negociaciones en curso

47. Como hecho que objetiviza la existencia de una voluntad política de mayor disposición para poner término a las situaciones de conflicto y guerra no declarada en la región, se han producido reuniones en el curso del presente año, que han perseguido arreglar los contenciosos pendientes de solución. En efecto, se han realizado hasta la fecha seis reuniones tripartitas (Angola, Cuba y Sudáfrica, con la mediación de Estados Unidos), a través de las cuales se ha buscado progresar hacia una solución pacífica del conflicto en el África meridional. Estas reuniones se han realizado sucesivamente en Londres, El Cairo, Nueva York, Ginebra, Brazzaville y Nueva York y han sido seguidas con gran expectativa por la opinión pública mundial, que aprecia con interés todo cuanto contribuya a la distensión y la paz en el mundo.

48. El curso de las negociaciones ha sido conocido por medio de comunicados de prensa emitidos por las partes deliberantes, pudiendo inferirse de ellos que se han conseguido avances importantes en cuanto a concordancia de criterios básicos para resolver las cuestiones en conflicto. Entre ellas el cumplimiento de la resolución 435/78 de las Naciones Unidas, que pone en ejecución el proceso para la independencia de Namibia. Otros acuerdos a los que se hace referencia en los comunicados y hechos públicos vinculados al progreso de las negociaciones en curso, parecen sugerir que se están adoptando medidas prácticas destinadas en lo inmediato a reducir el riesgo de confrontaciones militares y a crear las condiciones necesarias para la continuación de las negociaciones y su conclusión exitosa.

49. Estas negociaciones, a juicio del Relator Especial, configuran una nueva situación que podría llevar al establecimiento de un régimen de paz garantizado entre Angola y Sudáfrica. Por esa vía se podrían también crear las condiciones necesarias para resolver el problema del mercenarismo no sólo en el territorio de Angola, sino también en otros países de la Línea del Frente que han denunciado su existencia.

50. El hecho, públicamente conocido, que las negociaciones ya hayan llegado a un acuerdo respecto de la aceptación efectuada por el Gobierno de Sudáfrica para proceder a la aplicación del Plan de las Naciones Unidas contemplado en la resolución 435/78 del Consejo de Seguridad, constituye un factor adicional de estabilidad y paz, que debe reflejarse necesariamente en el curso positivo de las negociaciones. Es de esperar que los otros puntos pendientes en las negociaciones culminen también en una concertación de voluntades.

51. Si las rondas de negociaciones y los acuerdos parciales hasta ahora adoptados se consolidan en un tratado definitivo de paz, el estado de guerra no declarado que afecta la región terminará y otras zonas conflictivas del mundo serán ganadas por la distensión y la paz. Es precisamente en este sentido que vienen trabajando las Naciones Unidas, cuyo Secretario General visitó a fines de septiembre de 1988 Sudáfrica para sostener conversaciones sobre la independencia de Namibia, obteniendo la aceptación de Pretoria para que un equipo técnico de las Naciones Unidas ingrese a Namibia y planifique la llegada de los componentes civil y militar de esa Organización.

52. Otra cuestión pendiente de solución es la resistencia del UNITA al Gobierno de Angola. Como es obvio, no es un asunto sujeto a negociación internacional, pues se trata de un conflicto interno. Antes bien, en el marco de los acuerdos de paz Angola tiene el derecho a exigir que cese la ayuda financiera, el entrenamiento militar y la presencia de mercenarios que el UNITA recibe de terceros. Sin esa ayuda, que constituye una intervención, el UNITA verá reducido su potencial militar, y es un hecho que como consecuencia del retiro sudafricano del sur de Angola, el UNITA ha abandonado una serie de posiciones, especialmente alrededor del ferrocarril de Banguela. Si tal fuera el caso, el conflicto interno en Angola se llevará al terreno político y el Gobierno de ese país podría poner en práctica la política de "clemencia nacional" sugerida por sus autoridades.

53. El presente informe ha sido adoptado a comienzos del mes de octubre; por tanto, no dispone el Relator Especial de elementos de juicio que le permitan predecir lo que sucederá en los días que faltan para el 1° de noviembre, fecha en la que, además de comenzar a aplicarse la resolución 435/78, se podría haber llegado a un acuerdo final sobre las cuestiones en las que subsisten diferencias. Por esta razón, el presente informe tiene carácter preliminar. Aún así, el Relator Especial considera que el encargo que ha recibido se vería en gran parte aliviado, en lo que a problemas de mercenarismo en el Africa sudoccidental se refiere, si la situación de conflictos político y militar que dieron pie a la guerra no declarada entre Angola y Sudáfrica y a hostilidades de tipo intervencionista, en cuyo contexto se reclutó, entrenó, financió y empleó mercenarios, quedan resueltos. La paz que es deseable se alcance, deberá eliminar esa condenable práctica. Pero al mismo tiempo, y en tanto el mercenarismo es un instrumento cuya recurrencia puede convertirse en una amenaza latente para la estabilidad de Angola y el conjunto de Africa sudoccidental, es necesario que la comunidad internacional se mantenga atenta, ayudando a esto, adecuados mecanismos jurídicos internacionales y nacionales que deberán prevenir y garantizar contra cualquier riesgo futuro de hechos de este tipo, que las Naciones Unidas han condenado como crímenes contra la humanidad y la paz.

/...

54. Por último, es esperable que de concretarse las negociaciones de paz en curso, ello contribuya favorablemente a la solución de otros conflictos todavía existentes en el África meridional, en los que también se ha señalado la presencia de actividades mercenarias, en particular el conflicto que opone a Sudáfrica con Mozambique.

VI. CONCLUSIONES

55. i) La Asamblea General ha condenado reiteradas veces el mercenarismo y la participación directa o indirecta de los Estados en esa actividad. Sin embargo, el problema del mercenarismo y la presencia de mercenarios subsiste con la misma capacidad de intervención en conflictos de diverso tipo. La naturaleza, alcance y gravedad del mercenarismo ha determinado que la Asamblea General declare que se trata de un crimen contra la paz y la humanidad, por lo que es necesario denunciar y combatir todo hecho o situación que en la práctica signifique el empleo de mercenarios que se involucren en algún conflicto, atentan contra la libre determinación de los pueblos y violan los derechos humanos.

56. ii) Tal como se ha sostenido en las conclusiones del primer informe, las actividades mercenarias se vinculan con hechos internacionalmente ilícitos tales como la injerencia en los asuntos internos, oposición militar a los movimientos de liberación nacional, atentados contra la integridad territorial, la soberanía e independencia de los Estados y la desestabilización y derrocamiento de los gobiernos legítimos, la subordinación del país afectado a los intereses de la Potencia promotora del conflicto y la violación de derechos fundamentales de las personas.

57. iii) La visita realizada por el Relator Especial a Angola para tomar conocimiento directo de las denuncias presentadas por ese país, la SWAPO y el ANC sobre la presencia de mercenarios en su territorio, permitió establecer que, de manera efectiva y continuada desde 1975 hasta la fecha, Angola ha sufrido ataques contra su territorio, sus instalaciones y su población, en los que han participado agentes mercenarios. Algunos de éstos fueron sometidos a juicio y ejecutados en 1976; otros han sido tomados prisioneros y dejados en libertad luego de cumplir condena o en operaciones de canje. En todos estos casos se acreditó ante los tribunales angoleños la condición de mercenarios de quienes fueron inculcados como tales.

58. iv) La SWAPO y el ANC en los campamentos que ocupan en Angola, pero también sus representantes en otros países africanos y europeos, han sufrido bombardeos y ataques destructivos de sus instalaciones y atentados criminales que han costado la vida de personas, habiéndose señalado la presencia activa de agentes mercenarios en la comisión de estos hechos. La actividad mercenaria contra la SWAPO también se ejerce dentro de Namibia y obedece al carácter independentista de ese movimiento y su lucha contra la ocupación ilegal de Namibia por Sudáfrica. En el caso del ANC, los ataques mercenarios obedecen a la resistencia que ese movimiento opone a la política segregacionista del Gobierno de Pretoria.

/...

59. v) El Gobierno de Angola ha responsabilizado a Sudáfrica de ocupar militarmente territorios de sus provincias sureñas, de utilizar Namibia para sus ataques, de intervenir en sus asuntos internos dando apoyo financiero, técnico y militar al UNITA y de emplear para estos objetivos tanto sus fuerzas regulares, como mercenarios, los mismos que actúan individualmente apoyando al UNITA, o en unidades especializadas incorporadas en las fuerzas regulares de Sudáfrica, como es el caso del Batallón 31 y del "Batallón Búfalo". El Gobierno de Angola ha señalado asimismo la presencia de mercenarios en el UNITA.

60. vi) La SWAPO y el ANC han señalado igualmente al Gobierno de Sudáfrica como responsable de reclutar, financiar, entrenar y utilizar mercenarios para los atentados de que son víctimas sus miembros e instalaciones. Según denuncian, estos agentes mercenarios provienen de países europeos, africanos y también de América Latina y los Estados Unidos.

61. vii) La presencia de fuerzas mercenarias en la región está directamente ligada a los conflictos no resueltos en esa zona, la ocupación ilegal de Namibia, el estado de guerra no declarada por Sudáfrica a Angola y la actitud de rebeldía del UNITA respecto al Gobierno de Angola. La eliminación de este problema pasa en tal sentido por la necesaria distensión en la región y por acuerdos de paz que garanticen la libre determinación, soberanía e integridad territorial de las partes en conflicto.

62. viii) Las actuales rondas de negociaciones entre Angola, Cuba y Sudáfrica, con la mediación de los Estados Unidos, sugieren la posibilidad de arribar a acuerdos que de manera satisfactoria establezcan la paz entre Angola y Sudáfrica y permitan la aplicación de la resolución 435/78 del Consejo de Seguridad mediante la que se garantiza la independencia de Namibia. Si estas previsiones de paz se cumplen, cesarán las hostilidades, Sudáfrica se retirará a sus territorios, se respetará la soberanía, independencia e integridad territorial de los Estados, no habrá injerencia en los asuntos internos de otros Estados, no se permitirá el uso del territorio nacional para actos de guerra, agresión o violencia contra otros Estados, se garantizará a cada Estado el derecho a la paz, la estabilidad y el desarrollo, se adoptarán las garantías de verificación y cumplimiento de las obligaciones, en fin, se articulará la cooperación africana e internacional para el desarrollo de la región. En tal contexto de distensión, paz y cooperación, es esperable que la actividad mercenaria desaparezca de ese escenario.

63. ix) En todo caso, los problemas mencionados han revelado la fragilidad de los instrumentos internacionales que legislan contra las prácticas mercenarias y la difícil probanza de ellas cuando se producen. Del mismo modo, es notoria la escasa legislación interna de los países para impedir y sancionar actos de mercenarismo, así como el reclutamiento, la financiación o el entrenamiento de mercenarios.

VII. RECOMENDACIONES

64. Fluyen de las conclusiones anteriores algunas recomendaciones que se formulan como complemento de las presentadas en el primer informe del Relator Especial.

65. i) El Relator Especial reitera enfáticamente la necesidad de buscar el consenso que haga realidad la eliminación de las prácticas mercenarias. En tal sentido, es conveniente seguir trabajando por un consenso internacional en la materia, adoptar políticas que sancionen las prácticas mercenarias, apoyar los trabajos del Comité Ad Hoc para la elaboración de una convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios y solicitar a los Estados miembros que incluyan en la legislación nacional sanciones adecuadas para quienes cometan delitos de mercenarismo. Tales sanciones deberán aplicarse en el marco del respeto a las garantías procesales, el derecho a un juicio justo y demás derechos fundamentales de la persona. En cuanto a las sanciones en sí mismas, deberán ser rigurosas pero sin llegar a la pena de muerte, cuya abolición es deseable.

66. ii) Habiéndose constatado que las prácticas mercenarias no han desaparecido en general y que ellas aparecen involucradas en situaciones conflictivas, particularmente en caso de guerra no declarada, intervencionismo y atentados contra la libre determinación de los pueblos, es recomendable que la Asamblea General reitere su condena a las prácticas mercenarias, señalando su carácter de crimen contra la paz y la humanidad, y sugiriendo a los Estados miembros la necesidad de adoptar medidas concretas contra las actividades mercenarias.

67. iii) Habiéndose presentado denuncias que señalan la responsabilidad de Sudáfrica en el reclutamiento, financiamiento, entrenamiento y utilización de mercenarios en actos que han lesionado la soberanía de Angola y que han significado pérdidas de vidas y bienes materiales en perjuicio de poblaciones africanas, es recomendable que la Asamblea General remita copias de estas denuncias al Gobierno de Sudáfrica para que éste presente los descargos correspondientes y, si quedara confirmada su responsabilidad, se adopten las medidas reparadoras, preventivas y sancionadoras que se estimen oportunas.

68. iv) Estando en curso negociaciones que pueden establecer una paz sólida en la región del Africa sudoccidental, es recomendable que la Asamblea General apoye vivamente esas negociaciones y haga lo necesario para que se firme un acuerdo de paz entre Angola y Sudáfrica en el marco del respeto a la soberanía, libre determinación e integridad territorial de los Estados, eliminando de esta manera cualquier forma de hostilidad, agresión o violencia que se pudiera promover desde el territorio de un país hacia el otro, y se eliminen las prácticas mercenarias. Del mismo modo, no deberá ahorrarse ningún esfuerzo para conseguir la plena aplicación de la resolución 435/78 del Consejo de Seguridad que asegura a Namibia su independencia.

69. v) Finalmente, el Relator Especial reitera su mejor disposición en contribuir al proceso de paz iniciado en el Africa sudoccidental y que pudiera extenderse al Africa meridional en su conjunto, pues la consolidación de tal proceso sería la fórmula más eficaz de erradicación de las prácticas mercenarias denunciadas en esa región. En este sentido, sería conveniente estudiar en profundidad las denuncias de prácticas mercenarias que proceden de otros países del área.
